

Treinta años después*

RODOLFO STAVENHAGEN

Hace treinta años publiqué un pequeño ensayo crítico en un diario mexicano, titulado «Siete tesis equivocadas sobre América Latina»⁽¹⁾, que corrió con alguna fortuna editorial ya que fue posteriormente reproducido y distribuido ampliamente, tanto en el continente latinoamericano como en el extranjero. Aquellos que lo hayan leído, tal vez recordarán que en aquel trabajo discutí y critiqué algunos enfoques de las ciencias sociales que por aquellas épocas estaban muy de moda en nuestras tierras, y propuse en forma más polémica que analítica otros enfoques y puntos de vista alternativos. Creo haber recogido en aquel ensayo algunas ideas que flotaban por esos años en el ambiente político-académico, y que eran compartidos por un numeroso grupo de investigadores, lo cual puede haber contribuido a su difusión y aceptación.

En años recientes me han preguntado con frecuencia si aún sostengo las posiciones expuestas en ese trabajo, si creo que las cosas han cambiado en América Latina, y cómo reformularía yo ahora dichas tesis equivocadas, incluso cuántas más habría que agregar. Aparte de que estas preguntas se prestan a divertidos juegos intelectuales, quisiera aprovechar la oportunidad, no para revisar una por una las nombradas «siete tesis» que tal vez sería un ejercicio estéril (sobre todo porque lo escrito hace treinta años dicho está), sino para presentar

algunas reflexiones no exhaustivas desde luego, acerca del estado actual de nuestro discurrir sobre la problemática latinoamericana.

De algunos años a la fecha se viene manejando en todos los ámbitos, desde las oficinas gubernamentales hasta los organismos multilaterales, pasando por las asociaciones de empresarios, las facultades de economía, contabilidad y administración, y los medios de comunicación masiva, un nuevo dogma: el de la economía de mercado. Lo califico de dogma porque generalmente se presenta sin reserva alguna que la llamada economía de mercado es la única solución posible a todos los males habidos y por haber de nuestros países latinoamericanos (y desde luego en el resto del mundo también); en otras palabras, una receta para la salvación. Por economía de mercado se entiende un sistema de intercambio de bienes y servicios en el que la distribución de los recursos se basa exclusivamente en consideraciones de precio monetario y en que los criterios de eficiencia se fundamentan en cálculos de costo-beneficio individual (de la persona o de la empresa, es decir, de la unidad que interviene en el mercado). El nuevo dogma nos asegura que éste es el mejor de los mundos posibles y que el mercado funciona mejor cuanto menor sea la intervención del Estado y de otros criterios calificados de «no-

RODOLFO
STAVENHAGEN,
antropólogo,
profesor e
investigador de
El Colegio de
México

*Ponencia presentada en el Congreso Mundial de Convergencia Participativa, Cartagena de Indias, 1 al 5 de junio de 1997.

⁽¹⁾ Periódico *El Día*, 25 de junio de 1965, México, D.F.

económicos» (políticos, sociales, culturales). Se dice que sólo mediante una libre economía de mercado los países hoy ricos lograron su progreso, y se pretende que la única vía para que los países pobres logren su progreso es adoptando sin restricciones ese sistema. En apoyo de estos argumentos se señala el desastre económico que dejaron las economías centralmente planificadas antes del derrumbe de los regímenes comunistas, y las revistas se llenan de historias de los nuevos empresarios multimillonarios que han surgido tras las huellas de la *nomenklatura*.

Hay dos métodos probados (según esta doctrina) para alcanzar el nirvana del libre mercado: el achicamiento del Estado como agente económico y la apertura de las economías nacionales a la economía global. En cuanto al primero, significa eliminar cualquier tipo de subsidio a la producción o al consumo, reducir al mínimo políticamente posible los gastos sociales en educación, salud, viviendas e infraestructura y, desde luego entregar a la iniciativa privada, de preferencia extranjera, cualquier empresa productiva de propiedad pública o mixta. En consecuencia, el ideario de la privatización, (considerada como la varita mágica para extender la economía de mercado) se ha transformado en parte esencial del dogma que estamos comentando.

El segundo método por el cual se nos abren las puertas al cielo es la apertura total e irrestricta de las fronteras. Adiós aranceles, tarifas, cuotas, impuestos, medidas protectoras y otros mecanismos que puedan oler a nacionalismo o, peor, a estatismo o socialismo. Con ello, se nos dice, nuestros países se harán más competitivos y eficientes, bajarán los costos y aumentarán los beneficios, lograremos exportar y conquistar mercados mundiales, aumentará el empleo, se acelerarán las tasas de crecimiento económico y el bienestar generalizado se extenderá como crema batida en un pastel. (Dicho sea de paso que la apertura tan pregonada es comercial y financiera, porque no se propone lo mismo para la circulación de la mano de obra).

El nuevo dogma también nos enseña que los países que resisten ser salvados serán condenados al infierno. Véase si no, lo que pasa con Cuba. O más cerquita, en la Nicaragua de la era sandinista. Y allá, en el mundo ancho y ajeno se encuentran las ruinas del comunismo, como cuadro aleccionador de un Brueghel apocalíptico a fines del siglo veinte. En cambio, los que aceptan el camino de la salvación, navegarán por mares dorados hacia la modernización y la prosperidad. ¿Acaso no tenemos como ejemplo mundial a México, ahora vinculado para siempre a los destinos de «Big Brother» a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, flamante miembros de la OECD, cuyo presidente adorna las portadas de las lujosas revistas financieras internacionales y reparte sabios consejos a sus congéneres menos afortunados?

Pero, un momento, ¿dije México? Disculpen el arrebato entusiasmado. Hablaba del México de 1994, cuya imagen estalló en mil pedazos en diciembre pasado cuando a raíz de una pequeña devaluación monetaria del 100% el cuento se acabó y con ello quedó una vez más en evidencia la ilusión neoliberal. El dogma del mercado no puede a todas luces sostenerse sin profundas revisiones. En primer lugar, es históricamente falso que el mercado sea un conjunto de agentes económicos atomizados que compiten libremente entre sí. Éste no existió en la época de la industrialización europea, ni durante el auge económico de Estados Unidos, ni en la constitución de los famosos NICs (países recién industrializados) de la Cuenca del Pacífico, ni en las «economías emergentes» de las que con tanto entusiasmo hablan hoy en día los especuladores internacionales; ni tampoco existe, por supuesto, en América Latina. Por el contrario, el mercado constituye una institución social regulada más o menos abiertamente por las políticas estatales y controlada en mayor o menor grado por los intereses económicos monopólicos y oligopólicos. Creer que el mercado tiene sus leyes propias totalmente desvinculadas de

consideraciones de tipo social y político es una de las grandes falacias de nuestro tiempo, cuando no, un engaño hábilmente manejado para disimular precisamente esos intereses. Recuérdense solamente las cíclicas «crisis» en las bolsas de valores, en las que invariablemente pierden los pequeños inversionistas cándidos y confiados, y obtienen multimillonarias ganancias quienes saben manipular la información. ¿Quién necesita ir a los casinos de Las Vegas si se puede jugar y apostar en la Bolsa?

De hecho, el mercado es un campo de relaciones de poder en el que los poderosos ganan y los débiles pierden. Esto se ve claramente en las enormes especulaciones financieras internacionales por la vía electrónica, que pueden de un momento a otro hacer tronar las bolsas de Buenos Aires, Sao Paulo o México, con desastrosas consecuencias para millones de seres humanos. Pero también se advierte en los mercados de «commodities» (café, petróleo...) así como en las decisiones de las empresas transnacionales de abrir o cerrar plantas en tal o cual lugar del mundo. Y al servicio de estos poderosos se encuentran los gobiernos y las agencias financieras multilaterales tales como el FMI y el Banco Mundial. No de otra manera puede explicarse el notorio «paquete de rescate» para México, organizado por el gobierno de Clinton con apoyo de las citadas agencias multilaterales, cuyo propósito fundamental no era ayudar a la economía mexicana sino salvar los intereses de los especuladores e inversionistas norteamericanos.

Para América Latina, la era de la globalización no es nada nuevo. Desde que esta región fue incorporada forzosamente al mercado mundial en el siglo XVI, ha sufrido los vaivenes del sistema capitalista. La reciente etapa de «mundialización» o «internacionalización» no es más que una faceta de la vieja dependencia (en su oportunidad analizada por el actual presidente de Brasil), disfrazada en piel de oveja. Las mismas críticas que en la Posguerra hiciera Prebisch y la CEPAL al

tradicional «crecimiento hacia afuera» de las economías latinoamericanas, puede hacerse hoy día a la estrategia de globalización. Cuando nuestro gobernantes anuncian alegremente que ha llegado el momento de ser más competitivos, no se refieren desde luego a nuestros pueblos sino a las facilidades que les están brindando a las empresas transnacionales para adueñarse de los controles de la economía nacional. No de otra manera puede interpretarse la manía de la privatización. Por lo demás, la globalización es selectiva. Si bien toda la población sufre sus efectos, solamente unos cuantos participan activamente en ella. No en vano se ha mencionado que el *jet set* latinoamericano tiene más en común con sus congéneres en Nueva York y Londres que con sus co-nacionales en las barriadas al otro lado del muro de enfrente. Y eso tampoco ha cambiado desde el siglo XVI.

Se nos asegura que la privatización de empresas estatales es necesaria por dos razones principalmente: primero, porque el Estado es un pésimo administrador, y segundo, porque los empresarios privados lo saben hacer mejor. Además, se afirma que con la privatización se recuperará el crecimiento económico. Ninguna de estas razones es válida. El Estado puede ser buen o mal administrador según las circunstancias; los empresarios privados también (miles de bancarrota lo atestiguan). Cuando el Estado crea empresas, es generalmente por motivos estratégicos y de soberanía nacional (por ejemplo, el petróleo en México y Venezuela). Cuando las compra, es generalmente porque los empresarios fueron incapaces de mantenerlas a flote. En cambio, ahora en la era de la privatización, se suelen entregar al sector privado, a cambio de precios irrisorios, empresas rentables y el Estado va paulatinamente abdicando de su soberanía. Además, no hay relación comprobada alguna entre privatización y crecimiento. La privatización, tan pregonada y promovida actualmente, sólo sirve a los intereses de las grandes empresas transnacionales en su actual empuje por

adueñarse de las pocas esferas económicas que aún se les escapan, y si de eso resulta o no una tasa mayor de crecimiento, depende de muchos otros factores. También es un error considerar la entrega de numerosos recursos anteriormente en manos del Estado o del sector social al capital foráneo, como equivalente a nuevas «inversiones extranjeras», porque lo único que sucede es un cambio de propietario.

Uno de los resultados más preocupantes de la desenfrenada carrera hacia la economía de mercado (y el desmantelamiento del sector social) es la considerable concentración del ingreso que está produciendo, al tiempo que contribuye al aumento de la pobreza y de la pobreza extrema (términos que ya forman parte del lenguaje económico internacional y sobre los cuales se producen extensas estadísticas). Tan es así, que incluso la ONU tuvo que convocar a una reunión cumbre sobre desarrollo social, uno de cuyos temas fue el combate a la pobreza; pero más allá de algunas resoluciones piadosas, la cumbre social no ha producido ningún resultado concreto. Según datos de la CEPAL, durante la década y media en que el modelo neoliberal se ha enseñoreado de nuestras economías, la pobreza relativa y absoluta empeoró en América Latina, incluso en aquellos países (como Chile) que acusaron tasas altas de crecimiento global. En Venezuela, por ejemplo, el 66% de la población vive en la pobreza crítica (se duplicó en dos años). Se comprueba una vez más lo que siempre ha sido evidente: el crecimiento económico no genera automáticamente mejores niveles de vida de la población. Por el contrario, la estrategia del mercado y de la globalización ha sido una perfecta maquinaria para fabricar pobres en nuestro continente. Esa tendencia global del capitalismo no sufrió cambio alguno en los últimos treinta años (por el contrario, se está advirtiendo también en los países más desarrollados).

Una de las causas del incremento de la pobreza en América Latina es el creciente desempleo y subempleo de la mano de obra. Contrariamente a lo que se dice, y

salvo algunas excepciones, la globalización cierra más puestos de trabajo que los que abre. Esto se debe fundamentalmente a dos factores. En primer lugar, la indiscriminada apertura comercial y el desmantelamiento de medidas protectivas para la industria nacional permiten el aumento de importaciones de todo tipo, cuyo saldo es a la postre altamente desfavorable para la supervivencia de numerosas pequeñas y medianas empresas, así como talleres artesanales, que tradicionalmente han sido empleadores de mano de obra. En segundo lugar, contrariamente a lo esperado y anunciado, las nuevas inversiones en actividades productivas, de servicios y financieras que tienen lugar en los países latinoamericanos como resultado de la globalización, no generan nuevos empleos al ritmo en que se van perdiendo los empleos tradicionales (sin contar su creciente demanda debido al crecimiento demográfico). Aunque no disponemos aún de estadísticas fidedignas al respecto, es probable que en el proceso de la globalización, cuando menos hasta ahora, el saldo ha sido negativo para la de mano de obra. Los «mercados emergentes» de los que tanto se habla lo son de capitales pero no de empleos.

En los últimos treinta años ha aumentado considerablemente lo que se llama la «economía informal», es decir el conjunto de actividades productivas, comerciales o distributivas que escapan al control del fisco, las autoridades laborales y sanitarias, así como a los registros estadísticos económicos corrientes. Generalmente las actividades informales se realizan en pequeña escala y a ellas se dedican sobre todo los que no logran obtener un empleo permanente y seguro. La mano de obra es mal pagada, la volatilidad y rotación de la fuerza de trabajo es alta; participan en número elevado las mujeres y los niños, víctimas de altas tasas de explotación.

Se decía hace tiempo que la economía informal no era más que la expresión de una etapa de transición en el proceso de modernización y que sería pronto absorbida en la economía formal al

consolidarse el capitalismo en nuestros países. En los años sesenta se había descubierto la "marginalidad", fenómeno acerca del cual se generaron enconadas disputas político-teóricas. ¿Quiénes eran los marginados? ¿Qué papel jugaban? ¿Eran revolucionarios? ¿Se trataba de un fenómeno permanente o transitorio? Después surgió una cierta literatura en la que se ensalzaba la imaginativa capacidad empresarial de los "informales", verdaderos innovadores capitalistas en pequeño, quienes mostraban las virtudes de la libre empresa ante los obstáculos insuperables del aparato burocrático estatal. Quien tuvo mayor éxito internacional con esta tesis es el economista peruano Hernando de Soto. No faltan quienes atribuyen los problemas de la economía informal al crecimiento demográfico, hablando ahora de una "población redundante" que incide en los gastos sociales pero no contribuye al producto nacional. Quienes admiten esta visión (a todas luces sesgada) proponen planes de control de la natalidad e incluso esterilizaciones masivas: ecos de neomalthusianismo.

Otros enfoques recientes han descubierto más bien, que la mal llamada economía informal consiste de hecho en un conjunto de actividades diversas que con frecuencia se vinculan directamente a las necesidades de la economía formal a la cual se encuentran subordinadas. Se sugiere, en otras palabras, que las actividades llamadas "informales" no se generan al margen de la economía capitalista, como una especie de economía paralela, sino por el contrario son generadas por esa misma economía capitalista porque así conviene a sus intereses. Entre otros ejemplos se pueden citar pequeños talleres de máquina de la industria textil o automotriz; servicios de limpieza, mantenimiento, distribución; comercio ambulante para la distribución de productos importados o manufacturados, etc. Al delegar a la "economía informal" actividades que de otra manera tendrían que incorporar formalmente, las empresas capitalistas logran bajar costos,

eliminar o reducir gastos y responsabilidades, disminuir riesgos, liberarse de engorrosos problemas sindicales, obtener ventajas fiscales, y en general rodearse de un entorno más favorable para la generación de beneficios. Más que "disfuncional" al desarrollo económico, las economías informales (así, en plural) resultan funcionales, útiles y hasta necesarias al desarrollo capitalista.

El debate en torno a la economía informal ha puesto de manifiesto el hecho de que nuestras sociedades son cada vez más fragmentadas. La visión de las sociedades duales o polarizadas predominó en el pensamiento latinoamericano durante muchas décadas, pero resulta insuficiente. En una primera instancia, se manejaba la idea de dos mundos: uno arcaico y otro moderno, y un proceso en el cual el primero se transformaría paulatinamente en el segundo. Este proceso sería el desarrollo. Tal visión la critiqué hace treinta años en el ensayo mencionado. En una segunda instancia, surgida de la crítica, se afirma que el polo subdesarrollado de las sociedades duales es a su vez producto del desarrollo dependiente y de las estructuras de explotación y dominación creadas por el sistema mundial en sus fases colonial y postcolonial. Esta visión resultó ser demasiado simplista. En realidad, el proceso de cambio de las últimas décadas ha producido una fragmentación y diversificación creciente de las sociedades latinoamericanas. Lo moderno no solamente convive con lo arcaico o tradicional, sino la modernización misma (para usar un concepto poco satisfactorio pero ampliamente aceptado) adquiere visos múltiples y heterogéneos, como resultado del proceso desigual de globalización y flexibilización económica. En el polo contrario, la marginación, la exclusión, el desarrollo del subdesarrollo (otro terminajo de los sesenta) no constituye simplemente un submundo homogéneo desecharable (y como diría Cardoso años después, ya ni siquiera explotable), sino más bien un conjunto de mundos y espacios (así como de identidades)

fragmentados e híbridos, que se articulan de manera diversa con la modernidad. Es por ello que no puede ya hablarse sencillamente de la "economía informal", sino más bien de redes de relaciones económicas en diversos niveles, entrelazadas entre sí y enraizadas en las estructuras sociales y culturales multiformes de nuestros países.

Si resulta correcta esta visión, podemos derivar varias conclusiones. En primer lugar, la política macroeconómica impuesta por las agencias financieras internacionales para supuestamente solucionar los problemas de América Latina no solamente es errada sino también contraproducente, porque al generar efectos positivos en un nivel (por ejemplo, corregir el déficit en cuenta corriente o detener las presiones inflacionarias), produce resultados en otros niveles que tienen un efecto multiplicador sobre el conjunto de las relaciones socioeconómicas del país, y que son difícilmente reversibles a corto plazo. En segundo lugar, no puede ignorarse que sociedades fragmentadas en alto grado (como lo son las latinoamericanas) tienen implicaciones directas para la acción social y política. Han surgido en los últimos años múltiples movimientos sociales (a veces calificados de "nuevos") que operan en espacios limitados y tienen dificultad para legitimarse a nivel de la sociedad en general así como para recoger los consensos necesarios con los que pudieran operar de manera unificada. El capitalismo desorganizado produce sociedades fragmentadas que generan movimientos sociales centrífugos y heteróclitos. Estamos lejos de aquella visión que profetizaba la polarización de la sociedad en dos grandes polos uniformes: los dominantes y los dominados, los explotadores y los explotados.

Con esto no quiero decir que no haya ya ni lo uno ni lo otro. Por el contrario, unos y otros (dominantes y dominados) ocupan el espacio social y económico desde sus diferentes posiciones, nada más que lo hacen en estructuras y niveles diversos de manera caleidoscópica. Las

contradicciones que generan estos procesos en el sistema político son tanto verticales como horizontales: son clasistas pero al mismo tiempo sectoriales, regionales, gremiales y étnicos. De allí que también resulta demasiado optimista la imagen generalizada de que los sistemas políticos latinoamericanos se encuentran en un franco proceso de transición a la democracia. Es cierto que se ha cerrado en los ochenta un ciclo de dictaduras militares que causó enormes daños a los pueblos latinoamericanos. También es cierto que se han multiplicado, con el retorno a los regímenes civiles, las elecciones periódicas de presidentes, gobernadores y legislaturas. Sin embargo, resulta prematuro hablar de la consolidación de la democracia. Aunque el contexto internacional les sea ahora menos favorable, y los pueblos parecen estar más organizados y menos dispuestos que en los años sesenta y setenta a tolerar los regímenes militares, la creciente crisis económico-social y la incapacidad de los regímenes civiles para hacerle frente, no hacen del todo imposible el retorno de los tiranos.

Pero no basta con un civil en la presidencia, ni con la realización periódica de elecciones para garantizar una vida democrática. Hay actualmente en América Latina regímenes civiles que son prácticamente rehenes de los militares, mientras que otros se alían con estos para impulsar políticas antidemocráticas. Por lo demás, un régimen democrático, para definirse como tal, necesita de otros elementos, tales como el respeto absoluto, y la protección de los derechos humanos; la posibilidad de exigir responsabilidades a gobernantes y autoridades ("accountability" lo llaman en inglés); el respeto escrupuloso a la independencia real del poder judicial; la participación directa y representativa de todos los sectores de la población en las tomas de decisión que afectan fundamentalmente la vida de todos los ciudadanos; el control de los monopolios (tanto económicos como de los medios de comunicación masiva); así como la promoción de políticas de equidad y

bienestar para las grandes mayorías más necesitadas de la población. Mientras no se den estas condiciones, difícilmente puede hablarse de consolidación de la democracia en América Latina, no importa cuántos observadores internacionales monitoreen las elecciones periódicas y les den su visto bueno. La verdadera democracia se debe construir desde abajo; no se pacta por arriba entre oligarquías económicas, élites políticas y mandos militares. En América Latina en los últimos años hemos visto más de lo segundo y menos de lo primero.

Muchas cosas han cambiado en el continente desde hace treinta años, pero otras muchas siguen igual. A pesar de tan ilusorias referencias a los beneficios de la globalización, los mercados emergentes y la modernización, América Latina sigue

inmersa en las mismas contradicciones que han caracterizado su desarrollo dependiente desde el siglo XVI. Después de la llamada década perdida de los ochenta, los años noventa se caracterizan ya por ser una segunda década perdida (cuando menos en cuanto a los pueblos se refiere). Las polarizaciones socio-económicas, la sumisión real a los centros mundiales del poder financiero, la persistente incapacidad (salvo excepciones) de impulsar políticas realmente democráticas que beneficien al grueso de nuestras poblaciones; los frustrados intentos populares recurrentes por alcanzar la soberanía y la justicia social y económica; todo ello constituye un cuadro preocupante y un reto permanente a nuestra imaginación sociológica, a nuestra capacidad de imaginar y construir futuros alternativos.